

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ
DEMANDADO	ARL SURA y OTRO
RADICADO	05001-31-05-011-2017-00908-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, controversia entre beneficiarios.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; en concordancia con los Acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ** contra la **ARL SURA** y la señora **SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ**, esta última vinculada al proceso en calidad de Litis consorte necesaria por pasiva.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 004**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante respecto de la sentencia totalmente absolutoria que profirió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 10 de junio de 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO era pensionado de la ARL SURA, y el valor de su mesada era equivalente al mínimo legal, y para el momento de su fallecimiento, esto es, el 30 de enero de 2008, se encontraba laborando para la empresa PROMINERALES y convivía en unión libre desde el 10 de enero de 1990 con la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ, tiempo durante el cual compartieron techo, lecho, y mesa, e igualmente procrearon dos hijos de nombre Sebastián y Sara Ocampo García, no obstante, el causante tenía otros dos hijos por fuera de ese núcleo familiar de nombre Erika Yulieth y Wilson Fader Ocampo García, mayores de edad en la actualidad

Finalmente aduce el escrito introductorio que era el causante JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO la persona encargada de proveer todo lo económicamente necesario a la demandante e hijos, y luego de su fallecimiento la pensión le fue otorgada a los hijos; finalmente señala la activa que la demandante MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ desde el año 2008 se encuentra discapacitada, y le es imposible trabajar.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que a la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO, en consecuencia, SE CONDENE a la ARL SURA, al reconocimiento y pago de esta prestación económica en forma retroactiva, junto con las mesadas adicionales, la indexación de las condenas, las costas del proceso, y todo lo que ultra y extra petita resulte acreditado en la Litis.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

La entidad accionada ARL SURA (fls. 39 al 45), a través de su apoderada judicial manifestó frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que no es cierto que el causante JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO fuese un pensionado de la entidad, por el contrario este detentaba la calidad de afiliado como trabajador dependiente, y la pensión de sobrevivientes que este dejó causada, es equivalente al salario mínimo legal, en la actualidad le está siendo reconocida en un 100% a la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ quien logro demostrara administrativamente su calidad de compañera permanente.

También se indica en la réplica, que es cierta la existencia de los hijos menores entre la demandante y el causante, y tan es así, que la ARL SURA les reconoció y pago a los jóvenes Sebastián y Sara Ocampo García el porcentaje que les correspondía de la pensión por el fallecimiento de su padre, y hasta la fecha en que cumplieron la mayoría de edad, al no acreditar su calidad de estudiantes, dejando en claro la entidad, que el tramite pensional realizado a favor de estos menores se hizo a través de su abuela materna la señora HERMILDA ROSA PÉREZ DE GARCÍA, pues tanto estos menores como la demandante se encontraban residenciados en el exterior, sin que le consten los restantes supuestos fácticos relatados por la activa, todo lo cual deberá ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las

excepciones de mérito que denominó: *“pago, buena fe de la demandada, inexistencia de la obligación, y prescripción”*.

Y como excepción previa, formuló la de “INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO”, por cuanto la pensión que persigue la demandante, ya le fue otorgada a otra compañera permanente de nombre SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, quien en la actualidad percibe el 100% de la pensión.

En atención a la excepción propuesta por la ARL SURA, la juez de primer grado dispuso integrar el litisconsorcio por pasiva con la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ ordenando la notificación correspondiente.

En vista que no se logró la notificación personal de la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, le fue nombrado un curador ad litem para que la representara al interior del proceso, y tal virtud esta auxiliar de la justicia procedió a dar respuesta a la demanda según consta a folios 153 al 155 del plenario, no obstante, y con anterioridad a celebración de la audiencia prevista en el art. 77 del CPTSS, la señora JARAMILLO GÓMEZ compareció al proceso a través de apoderado judicial, solicitando la nulidad del proceso desde el auto del 10 de marzo de 2016 donde se ordenó su integración al proceso en calidad de Litis consorte necesaria por pasiva, solicitando una nueva oportunidad para presentar la contestación a la demanda, pues solo se enteró de la existencia del proceso, por un mensaje que le dejó la apoderada judicial de la ARL SURA a través de su cuenta de Facebook.

También relato en su escrito, que era ella la real compañera permanente del causante JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO, con quien convivió en unión marital de hecho desde el año 2003 y hasta su fallecimiento, hecho ocurrido el 30 de enero de 2008, y por tal motivo le fue reconocida la pensión de sobrevivientes por parte de la ARL SURA.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de consulta, la juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 10 de junio de 2019, DECLARÓ probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por la ARL SURA, en

consecuencia, ABSOLVIÓ a esta entidad y a la litisconsorte por pasiva SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por la demandante MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ, a quien le fueron impuestas las costas procesales de la primera instancia.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la demandante MARÍA SOCORRO GARCÍA PÉREZ no acreditó en el plenario una convivencia mínima con el causante en los 5 años anteriores al fallecimiento, por el contrario, quedo demostrado que la demandante en ese mismo lapso de tiempo se encontraba residenciada en España, y por ello el derecho pensional debe continuar en cabeza de la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, toda vez que de la investigación administrativa adelantada por la ARL SURA con ocasión al fallecimiento del afiliado (fls. 83 al 89), se pudo constatar que era esta, la real compañera permanente del causante.

CONSULTA

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de las partes, y que la misma resulto totalmente desfavorable para la demandante MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ, se dispuso a su favor el grado jurisdiccional de consulta ante este tribunal de distrito judicial, en atención a lo dispuesto en el art. 69 del CPTSS.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la ARL SURA, Dra. LINA MARÍA DIEZ PERDOMO, solicita en su escrito, se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia, indicando para ello que desde el proceso administrativo adelantado ante la ARL, quedó en evidencia que la demandante MARIA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ no convivía con el afiliado para la fecha de su muerte, época para la cual la reclamación de la pensión de sus hijos menores se realizó por medio de poder otorgado por la demandante a la Señora Hermilda Pérez expedido desde España, lugar de residencia de la demandante, es decir su domicilio era en un país diferente al del afiliado fallecido, lo que desvirtúa el requisito de la

convivencia. Adicional a lo anterior, la demandante de acuerdo a las declaraciones que se recibieron en audiencia de trámite, desde hace muchos años antes del fallecimiento del causante viajó a España y se radicó con sus hijos menores y no asistió a la audiencia de conciliación y tramite precisamente por encontrarse en el exterior, en su lugar de residencia, y la prueba testimonial por ella presentada no resulta idónea para la acreditación del requisito legal.

VI. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes por fallecimiento de afiliado, controversia entre compañeras permanentes. Teniendo en cuenta el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte demandante, el cual permite una revisión integral de la sentencia de primer grado, la controversia jurídica que debe resolverse, consiste en determinar, si la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ acredita o no los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de origen profesional, en calidad de compañera permanente supérstite del afiliado fallecido JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO, y en caso afirmativo, se resolverán las demás pretensiones consecuenciales, relativas al retroactivo pensional e indexación de las condenas.

Procede la Sala a resolver lo pertinente dentro de su competencia, advirtiendo que para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, la disposición llamada a regir el presente asunto es la contenida en el art. 11 de la Ley 776 de 2002, que a su vez hace una remisión al art. de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- i) La ocurrencia de un accidente de trabajo que derivo en el fallecimiento del señor JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO, insuceso acaecido el 30 de enero de 2008 (fls. 15).
- ii) El reconocimiento de una pensión de sobrevivientes de origen profesional, por parte de la ARL SURA a favor de los jóvenes WILSON FADDER OCAMPO GARCIA, SEBASTIAN CAMILO OCAMPO GARCIA, y SARA YINETH OCAMPO GARCIA en calidad de hijos menores del afiliado fallecido, y a la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ en calidad de compañera permanente supérstite (fls.58 al 63).
- iii) La existencia de un poder especial suscrito ante el CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN BARCELONA – ESPAÑA, de fecha 9 de mayo de 2008, mediante el cual la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ autoriza a su señora MADRE HERMILDA ROSA PÉREZ DE GARCÍA, para que en su nombre y representación cobre la prestación social a favor de sus hijos menores. (fls.74 al 82)
- iv) Y finalmente obra a folios 83 al 88 del plenario, copia de la investigación administrativa y la visita familiar realizada por SURATEP hoy ARL SURA, con ocasión a las solicitudes pensionales presentadas luego del fallecimiento del afiliado JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO.

Ahora bien, no existiendo discusión frente a la causación del derecho pensional como tal, pues el 100% de esta prestación económica le está siendo pagada en la actualidad a la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, en calidad de compañera permanente supérstite, la problemática que pasará a analizar la Sala, consiste en determinar si a la demandante MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ también le asiste derecho a recibir esta misma prestación económica en forma compartida o exclusiva, por detentar presuntamente la condición de compañera permanente del afiliado fallecido JORGE IVAN OCAMPO CASTRO.

Debe recordarse que la juez de primer grado, declaró que la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ, no acreditó esa convivencia mínima de 5 años a la que alude el literal a) del art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la ley 797 de 2003, convivencia mínima que en virtud de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, se hacía extensiva los casos de afiliado fallecido.

No obstante, advierte esta Sala que, con posterioridad a la sentencia de primer grado, la jurisprudencia reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha variado su postura respecto a este tema, pero únicamente en relación al literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, y es así como en sentencia de casación SL 1.730 de 2020, expuso al respecto:

“Como consecuencia de la nueva integración de la Sala, se considera oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal A del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que armonice con los fines del Sistema Integral de Seguridad Social en general, y de la pensión de sobrevivientes en particular, así como con las razones que llevaron a establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto, y conforme a ellas, bajo qué presupuesto debía operar.

El Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida digna, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con la finalidad específica de amparar las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte...”.

(...)

Y es que, de la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que

la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto)

Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto de ley, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que “Se regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes” (subraya y negrilla fuera de texto).

(...)

La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el entendido de la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia, que ya sea constituida por vínculos naturales o jurídicos, que en todas sus modalidades se encuentra constitucionalmente protegida, como núcleo esencial de la sociedad (art. 42 CN).

En este punto resulta necesario precisar, que conforme al análisis hasta aquí efectuado, de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.

Lo anterior comporta también que, contrario a lo considerado por el Tribunal, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.

(...)

Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

(Negrilla fuera de texto original)

Teniendo en cuenta el nuevo criterio jurisprudencial del órgano de cierre de la especialidad laboral y seguridad social, a la demandante MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ solo le bastaba acreditar la existencia de una vida marital con el causante JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO para el momento en que ocurrió su fallecimiento, esto es, para el 30 de enero de 2008, pero sin cumplir con una convivencia mínima.

Sin embargo, de las pruebas recaudadas en la presente Litis, no se logró probar que esa unión marital de hecho como compañeros permanentes se encontrare vigente para el 30 de enero de 2008, esto es, que para dicha fecha la pareja se encontrare en una comunidad de vida, acompañada de solidaridad y apoyo mutuo, pues precisamente la finalidad de esta prestación económica es la de salvaguardar el sostenimiento económico el núcleo familiar del ausente.

Por el contrario, del interrogatorio de parte practicado a la litisconsorte necesaria por pasiva SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ y el testimonio del señor JAIME ENRIQUE LOAIZA MONCADA, se logró evidenciar que la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ se encontraba residenciada en ESPAÑA desde hacía varios años con anterioridad al fallecimiento del causante, y si bien este último testigo trató de hacer creer al despacho que la demandante se encontraba residenciada en Colombia, pero trabajaba en ESPAÑA, su tesis no tuvo acogida en la primera instancia, al no resultar creíble que una persona que solamente viajaba a Colombia en el mes de diciembre y se regresaba a España en el mes de enero siguiente, en realidad estuviere residenciada en su país de origen.

Al analizar en conjunto, el interrogatorio de parte, la prueba testimonial y documental alegada al proceso, solo puede inferirse que el causante JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO llegó a tener un vínculo marital con la señora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ donde se procrearon dos hijos, pero que este vínculo ya no se encontraba vigente para la fecha del accidente de trabajo que le cobró la vida, pues este afiliado ya era parte de otro núcleo familiar conformado con la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, y fue este el motivo por el cual, en un principio la demandante no reclamó para sí el derecho pensional como compañera permanente superviviente, pues, para la fecha del infortunio la jurisprudencia nacional era estricta al exigir convivencia mínima

tanto por muerte de pensionado como de afiliado, lo que en su momento la persuadió de efectuar petición para sí, y de reclamar únicamente lo de sus dos hijos menores, valiéndose inclusive del Consulado de Colombia en España y de su señora madre para adelantar las gestiones pensionales.

Y a esta misma conclusión arribó la ARL SURA durante el trámite administrativo, así consta en el informe realizado luego de la visita familiar, donde se consignó lo siguiente.

“3. Aspecto Familiar

Jorge Iván tuvo un primer matrimonio, que finalizó en el divorcio y en liquidación de la sociedad conyugal, y con su esposa tuvo dos hijos, Erika y Wilson, de 20 y 17 años respectivamente.

Después del divorcio tuvo una relación de hecho con una mujer llamada Socorro, y con ella tuvo dos hijos, Sebastián Camilo y Sara, de 16 y 11 años, y cuando dicha relación terminó, él le entregó a ella 150 millones de pesos de patrimonio. Desde hace 5 años que socorro y sus dos hijos viven en España...”.

En vista de lo anterior, estima la Sala que en el sub lite no se logró acreditar que la unión marital de hecho entre los señores JORGE IVÁN OCAMPO CASTRO y MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA PÉREZ, se encontrará vigente para el 30 de enero del año 2008, como sí ocurrió con la unión marital de hecho entre este mismo causante y la señora SANDRA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ, motivos por los cuales se confirmará la sentencia absolutoria proferida en primera instancia, al encontrarse acorde con la realidad fáctica vertida en la presente Litis.

Sin costas en esta instancia, por haberse conocido del proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

VII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESULEVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de consulta de fecha y procedencia conocida, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N °
015 del 1 de Febrero de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>